

Reseñas

Héctor Marín López y Miguel Palacios Moncayo, *Las elecciones federales de 1991 en Durango*, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto de Ciencias Sociales, 1991, 48 pp.

EL ESTUDIO de los procesos electorales en México ha adquirido importancia creciente en los últimos años, sobre todo a partir de las elecciones presidenciales de 1988. Sólo que en los trabajos recientes se ha pasado de la perspectiva general a la visión más focalizada o ubicada en espacios geográficos menos extensos. Dentro de tal óptica se ubica este trabajo, parte del proyecto sobre elecciones federales de 1991, coordinado por Silvia G. Tagle.

Este estudio, apoyado en investigación de campo, así como en material estadístico, muestra el abanico de las actitudes ciudadanas y las posturas partidistas en el marco de la realidad política de Durango, entidad que posee una importante población rural y urbana. El primer tipo de población se caracteriza por una hegemonía priísta prácticamente indiscutible, dado el peso político de la Confederación Nacional Campesina, situación de la que sólo se escapa la zona de La Laguna, donde los grupos de ejidatarios se identifican con la posición cardenista; de ahí que esa región se caracterice por ser un bastión del Partido de la Revolución Democrática.

Por otra parte, es en las zonas urbanas, particularmente en la capital, donde se encuentra el mayor núcleo de oposición al partido oficial; efectivamente, es ahí donde se ha hecho presente el movimiento de colonos denominado Comité de Defensa Popular (CDP), organización que cuenta con dos décadas de existencia y que recientemente ha apoyado al Partido del Trabajo. El CDP está integrado no sólo por los ocupantes de terrenos urbanos, sino también por vendedores ambulantes (una clientela relativamente nueva) y propietarios de vehículos extranjeros, lo que da idea de la heterogeneidad de sus grupos componentes. A pesar de todo, la Confederación de Trabajadores de México brinda todavía notoria fuerza al PRI en las ciudades de Durango y Gómez Palacio.

El trabajo resalta la promoción por todos los partidos de prácticas de tipo clientelista, corporativo y premoderno, mismas que ilustran la dinámica de las relaciones entre el gobierno y la sociedad locales. Tales características están más marcadas en los partidos Revolucionario Institucional y del Trabajo. Se señala que la defección del CDP en lo que atañe a su alianza con el PRD tuvo dos razones: una

fue la concertación entre la dirigencia cedepista y el gobernador José Ramírez Gamero, que consistió en el reconocimiento del PT en 1989; en virtud de tal acuerdo, el CDP logró postular candidatos propios para contender en las elecciones locales y nacionales, cosa que le estaba vedada en su vínculo con el PRD. La otra razón fue la firma en el mismo año de un convenio entre el CDP y el Programa Nacional de Solidaridad, hecho que concilió a la dirigencia cedepista con el debutante gobierno de Salinas de Gortari.

En lo que atañe a otros actores locales, se menciona a la iglesia católica, al Partido Acción Nacional, así como a los partidos del Frente Cardenista y Popular Socialista; a últimas fechas en la escena política se perfilan el PAN y el PT como fuertes competidores del PRI. Un dato relevante al respecto puede ser el triunfo electoral que alcanzó el PT en 1992 en el municipio de la capital duranguense.

Una parte central del trabajo consistió en explorar el comportamiento electoral y partidario en el municipio Nombre de Dios, sede de la ciudad de Durango: los autores tomaron como campo de estudio una zona urbana. En la jornada electoral del 18 de agosto de 1991, a pesar de que el PFCRN, el PPS y el PT declararon que vigilarían conjuntamente el desarrollo de los comicios, se notó su gran carencia de representantes en este municipio. Si tal situación no es excepcional sino generalizable a toda la entidad (¿y a todo el país?, nos preguntamos) es válido interrogarse sobre la capacidad de estos partidos de unir esfuerzos en pos de un objetivo común.

También en el citado municipio se confrontaron los resultados de una misma sección electoral en las jornadas de 1988 y 1991, encontrándose que en el primer año, de un padrón con poco más de 11 000, sólo votó el 27.8%, mientras que en el segundo, votó el 56.3% de un padrón con alrededor de 10 000 personas. En ese trienio el PRI pasó de 61% a 56.3%, si bien en términos absolutos pasó de aproximadamente 2 000 a poco más de 3 000 votos; por su parte, la participación del PAN descendió de 11.6% a 3.6% en términos relativos, y a la mitad en términos absolutos. En lo que atañe al PT se menciona que obtuvo 41.7% de sufragios en 1991; al confrontar esta votación con la del Frente Democrático Nacional (FDN) en 1988, que fue de 22.1% respecto del total, y tres veces inferior en números absolutos a la obtenida por el PT, se aprecia la gran densidad representativa de este último en tal sección electoral. Sin embargo, a nuestro juicio, si los autores deseaban conseguir una comparación más ilustrativa y rica en datos, su observación de ambas elecciones federales tendría que haber abarcado a todo el municipio.

En el plano estatal, en las elecciones de 1991 el PRI obtuvo 62.1% de la votación, el PAN 16.5%, el PT 11% y el PRD 5.8 por ciento. El texto alude a que el surgimiento del PT como organismo regional es un fenómeno que requiere analizarse a fondo, en concreto su capacidad de rivalizar con el PRD y el partido oficial.

Antes del proceso electoral de 1991 se dieron las campañas de empadronamiento y credencialización, en las cuales se volcó un presupuesto público (federal y estatal) muy considerable. El estudio menciona que el Instituto Nacional de Estadística

(INEGI) y el Registro Federal de Electores (RFE) operaron con un mismo personal en Durango; el INEGI manejó en dos ocasiones cifras diferentes sobre la población estatal en edad de votar, “lo que —dicen los autores— creó confusión entre las autoridades electorales y los partidos políticos”.

Los responsables de la realización operativa de estas campañas, debido a las grandes cargas de trabajo, no pudieron evitar notorias fallas en el seguimiento de sus tareas. El resultado lógico de este proceso fue que no se entregó la credencial de elector a 20% de los ciudadanos. Los autores efectuaron tal cálculo cotejando las cifras de población credencializada aportadas por el RFE con los datos de personas en edad de votar (que tuvieran 18 años o más) aparecidos en el Censo de Población de 1990.

Por otro lado, hubo un operativo de “credencialización selectiva” que tuvo como base el levantamiento del padrón priísta, de manera simultánea a las tareas del RFE; el partido oficial cubrió así con “eficiencia” todas las secciones territoriales afines a sus filas, mientras que (según denuncias de la prensa) las autoridades del RFE eliminaron del padrón a ciudadanos radicados en zonas proclives a otros partidos.

El estudio contiene datos importantes acerca de la realidad política estatal, pero carece de información más detallada en cifras para efectuar un análisis comparativo de los comicios de 1988 y 1991, tomando como base los resultados electorales en el plano municipal para, a partir de ellos, señalar futuras tendencias del comportamiento ciudadano; tampoco aparece en el trabajo un mapeo de los distritos electorales de Durango atendiendo a su grado de urbanización. En todo caso, se aprecia una mayor concentración del voto anti-priísta (sea cardenista, cedepista o panista) en las zonas con mayor índice de urbanización: Durango y Gómez Palacio. Podríamos anotar que un botón de muestra de este fenómeno fue la campaña electoral de Rodolfo Elizondo (candidato por el PAN y el PRD en 1992 a la gubernatura), que tuvo un efecto considerable en los electores de ambas ciudades.

En relación con el control oficial sobre las votaciones de 1991, ocurrió algo similar al resto del ámbito nacional, ya que la llamada ingeniería electoral también consiguió en Durango debilitar y dispersar el sufragio contrario al PRI. Sin embargo, los autores no ahondaron suficientemente acerca de la especificidad del manejo tecnocrático de tales comicios en lo que corresponde a la región estudiada.

Hay que añadir al panorama descrito lo ocurrido en las elecciones estatales de 1992, dado que en ellas el partido oficial obtuvo 12.5% menos votos para su candidato a gobernador (Maximiliano Silerio Esparza) con respecto a las elecciones para diputados federales en 1991. Por su parte la Coalición PAN-PRD obtuvo dos terceras partes más de votos para su candidato a gobernador que la suma de los sufragios correspondientes a ambos partidos el año anterior. A pesar de la manipulación en las cifras oficiales sobre las elecciones, debe reconocerse la presencia de un importante respaldo social al partido del Estado en los comicios de 1991 y 1992;

este apoyo fue ganado fundamentalmente a través de la penetración del Programa Nacional de Solidaridad en las áreas rurales de la entidad. Hay que tomar en cuenta también la eficacia de otros dos mecanismos consensuales, paralelos al PRONASOL: el financiamiento de la campaña de Silerio Esparza por la mayoría de las presidencias municipales (bajo control del PRI), y la recolección de credenciales de elector en dependencias de gobierno y establecimientos comerciales privados que operaban bajo la protección de funcionarios públicos.

Cabe sólo añadir la falta de mayores elementos informativos tales como: la tasa de escolaridad en el estado, el promedio de su población urbana y rural, las corrientes migratorias vinculadas a su desarrollo económico en los años recientes, las políticas de inversión pública en relación con zonas de alto riesgo para la hegemonía priísta, etc. El manejo de tales datos se hace indispensable para entender cabalmente el comportamiento electoral como un acto determinado por múltiples factores —y del cual surgen también serie de significaciones— que dan sentido a la dinámica política de una sociedad local, sea la duranguense o de cualquier otra parte de la república.

J. Aurelio Cuevas Díaz